

Información de prensa on line

“Redacción Médica” – 12 de mayo 2011

PUBLICA UN DECÁLOGO PARA SU USO JUNTO A PHILIPS Y LA FUNDACIÓN GASPAR CASAL

El Comité Español de Resucitación Cardiopulmonar reclama la instalación de desfibriladores en zonas públicas

La industria calcula que existen entre 3.000 y 5.000 ya instalados, pero no hay estudios al respecto

Enrique Pita/Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
El Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (Cercp), con la colaboración de Philips y de la Fundación Garpar Casal (FGC), ha presentado un **documento de consenso** en el que solicita la implantación de desfibriladores en zonas públicas, al tiempo que establece los protocolos para su uso y una serie de recomendaciones.

Cada año se producen en España 24.000 paradas cardíacas, de las que un elevado porcentaje tiene lugar fuera de los centros hospitalarios. Este dato es relevante, ya que tan solo en un 5 por ciento de los casos que suceden fuera de un hospital se resuelven con la supervivencia del paciente. En este sentido, los expertos inciden en la necesidad de una pronta intervención, ya que el acceso rápido podría aumentar las probabilidades de supervivencia en 3 de cada 4 casos. “El tiempo es fundamental”, señala el presidente del Cercp, Juan B. López Messa, que explica que “la extensión de la implantación de estos aparatos, sencillos y seguros de usar, es clave”.



De izquierda a derecha, el director de la Fundación Gaspar Casal, Juan del Llano; la directora de Comunicación, Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Corporativa de Philips Ibérica, Ángeles Barrios, y el presidente del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, Juan B. López Messa.

Ante esta situación, y tras analizar los datos de una encuesta realizada por Sigma Dos que señala que el 71'4 por ciento de los españoles no saben qué deberían hacer en el caso de que en su presencia sufriese un paro cardíaco súbito, se puso en marcha, en colaboración con FGC y Philips la elaboración de un decálogo para solicitar la implantación de desfibriladores en zonas públicas de gran afluencia, tales como estaciones de metro o ferrocarril, instalaciones deportivas o centros comerciales.

Pero esta instalación debe ir acompañada de otras medidas, tales como cambios normativos que dejen claro que no es punible que una persona sin formación adecuada los use ante una parada cardíaca de la que es testigo, y, yendo más allá, requiriendo a las autoridades educativas que incluyan la formación específica en su uso en el Bachillerato. Además, es necesario que los desfibriladores automáticos dejen de ser considerados dispositivos médicos complejos y sean tomados como productos para la seguridad de los consumidores. “Decir que un DEA solo puede usarlo personal sanitario es como decir que un extinto solo puede usarlo un bombero”, asegura López Messa.

“Esta tecnología constituye en muchos casos la clave para salvar la vida de un paciente”, señala la directora de Comunicación, Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Corporativa de Philips Ibérica, Ángeles Barrios, que afirma que la empresa a la que representa reclama una implantación de estos dispositivos “con calidad, no con cantidad”, porque de nada sirve instalarlos en lugares poco adecuados.

En este sentido, el director de la Fundación Gaspar Casal, Juan López del Llano, señala que “en este momento se están ubicando usando el sentido común y la experiencia de otros países”, si bien “no hay estudios que indiquen cuántos hay instalados”, aunque se calcula que pueden ser entre 3.000 y 5.000, pero no necesariamente en lugares públicos como tales, ya que muchos están en oficinas, empresas, u hoteles. Pero la no instalación no tiene que ver con su rentabilidad, ya que se estima que es rentable un desfibrilador ubicado en una zona en la que se produce una parada cardíaca cada cinco años, sino con las trabas administrativas existentes en nuestra legislación.

Así, López del Llano reclama al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que asuma “un liderazgo mayor del que tiene” para coordinar una política común con todas las autonomías. Este es, precisamente, uno de los objetivos de este Decálogo de Consenso para cuya elaboración se ha contado no solo con especialistas médicos en el ramo, sino también con la colaboración de representantes de las comunidades autónomas, que en definitiva concluyen que los beneficios de su uso son indiscutibles y que para ello hay que tomar medidas adecuadas tales como eliminar las barreras que existen para su implantación, reformar las normas para que exista una autorización explícita para el uso de estos desfibriladores automáticos por parte de personal no sanitario, o mejorar la formación respecto a la propia parada cardíaca y al uso de los DEA.